ELMER ENRIQUE DAZA DAZA

ABOGADO

UNIVERSIDAD LIBRE

Celulares: 315-7177778 – 300-5705680E-mail elmerenriquedaza@hotmail.com

Carrera 11A N° 11-71Valledupar

135378

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CENTRO DE SERVICIOS DE JUSTICIA

-7 FEB 2020

Señor

JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

E.

S.

D.

8
507pm M4

Ref.: Proceso Ejecutivo del **FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO "FINAGRO"** contra **IBELINTON ANTONIO MONTAÑEZ SANCHEZ y EDINSON ROSADO SANCHEZ.**

Radicado N° 20001-40-03-004-2009-00153-00.

ELMER ENRIQUE DAZA DAZA, varón, mayor de edad, domiciliado y residenciado en Valledupar, portador de la cédula de ciudadanía número 12'550.305 expedida en Santa Marta, abogado en ejercicio con T.P. No. 51.035 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, señor **IBELINTON ANTONIO MONTAÑEZ SANCHEZ**, mayor de edad, domiciliado y residenciado en Valledupar, identificados con las cédulas de ciudadanía números 12'719.196, ello en virtud al poder especial, amplio y suficiente a mi otorgado el cual anexo a este escrito, comedidamente y estando dentro del término de ley, acudo ante usted a contestar la demanda inicial del asunto del epígrafe y proponer excepciones de fondo.

SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

AL HECHO 1: Es parcialmente cierto; porque no obstante ser el PRAN un programa de Estado o de Gobierno, FINAGRO lo convirtió en negocio financiero, y una de las consecuencias de ese desatino de FINAGRO, es que hasta la fecha el programa no ha producido los efectos perseguidos, esto es la reactivación económica del Sector Agropecuario.

AL HECHO 2: Es cierto, y esta manifestación corrobora el hecho en que el PRAN es un programa de Estado o Gobierno que FINAGRO convirtió en un negocio financiero, llevando con ello al traste los fines del programa el cual es la reactivación económica del Sector Agropecuario.

AL HECHO 3: Es cierto.

AL HECHO 4: Es cierto, pero a la fecha de incoarse la acción de la referencia las obligaciones contenidas en los pagarés objetos del recaudo se encuentran prescritas, por lo tanto no son exigibles.

SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA:

Me opongo totalmente a las pretensiones del demandante en razón de los fundamentos que esbozaré en las excepciones de fondo que seguidamente propongo.

I.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA EJERCIDA EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA Y DEL DERECHO AUTOMO CONTENIDO EN LOS PAGARES N° 01106536-1 Y N° 01106536-2 OBJETOS DEL RECAUDO:

La cual se basa en los siguientes fundamentos:

HECHOS:

1°.- Según la entidad accionante, el deudor se encuentran en mora desde el **21 de mayo de 2006**, para pagar el total de la obligación contenida en el pagaré N° **01105732-1**, por concepto de capital de **\$56'287.355,00**, esto es, que la acción cambiaria le prescribió al acreedor en fecha **mayo 21 de 2009**, además, que igualmente se encuentran en mora desde el **22 de mayo de 2006**, para pagar el total de la obligación contenida en el pagaré N° **01105732-2**, por concepto de capital de **\$13'933.415,00**, esto es, que la acción cambiaria le prescribió al acreedor en fechas **mayo 12 de 2016** y **mayo 21 de 2009**, respectivamente.

2°.- Si bien es cierto que por mandamiento legal (Ley 1328 de 2009; Leyes 1380 y 1430 de 2010; Ley 1504 de 2011; Ley 1694 de 2013 y Ley 1731 de 2014) los términos de prescripción de los pagarés que contienen las obligaciones a cargo de los deudores beneficiarios del PRAN fueron suspendidos, al igual que la presentación de nuevas demandas ejecutivas, no todos esos deudores gozaron de esos beneficios.

Los párrafos 1°, 2° y 3° del artículo 10 de la **Ley 1504 de 2011**, establecen: "*Aquellos deudores que se acogieron a los términos de los Decretos 4222 de 2005, 3363 de 2007, 4678 de 2007 o 4430 de 2008, este último en cuanto a las modificaciones introducidas a los artículos 6° del Decreto 1257 de 2001 y 10 del Decreto 2795 de 2004, podrán acogerse a lo previsto en la presente ley, en cuyo caso se reliquidará la obligación refinanciada, para determinar el valor a pagar.*" (...) "*Para acogerse a las condiciones establecidas en la presente ley, los deudores deberán presentar el Paz y Salvo por concepto de seguros de vida, honorarios, gastos y costas judiciales, estos últimos, cuando se hubiere iniciado contra ellos el cobro de las obligaciones.*" (...) "**Finagro, o el administrador o acreedor de todas las obligaciones de los programas PRAN, deberá abstenerse de adelantar su cobro judicial por el término de los veinticuatro (24) meses contado a partir de la vigencia de la presente ley, término este dentro del cual se entienden también suspendidos los procesos que se hubieren iniciado, así como la prescripción de dichas obligaciones, conforme a la ley civil. Lo anterior sin perjuicio del trámite de los procesos concursales. No obstante la suspensión de la prescripción por el término señalado en el inciso anterior, Finagro o el administrador o acreedor de las obligaciones de los programas PRAN, tendrá la atribución de iniciar y adelantar procesos judiciales de cobro a partir del 1° de octubre del 2012 contra los deudores que no hayan cumplido todos los requisitos: para acceder al beneficio y los plazos vencidos de sus obligaciones ameriten, a juicio de Finagro, el inicio del cobro. Dichos nuevos procesos no estarán sometidos a la suspensión del inciso anterior. En todo caso, el deudor demandado conservará el beneficio para el pago previsto en el inciso 1° del presente artículo y en el parágrafo 2°.**" (Negritas y subrayas fuera del texto).

Además el artículo 9° de la **Ley 1731 de 2014**, modificatorio del Art. 1° de la Ley 1504 de 2011, señaló: "*Acciones de cobro a deudores del PRAN y del FONSA. No obstante la suspensión de que trata el artículo anterior, **FINAGRO o la entidad que obre como administrador o acreedor de las obligaciones de los Programas PRAN y/o del FONSA, tendrá la obligación de iniciar y adelantar las acciones de cobro correspondientes a partir del 1° de octubre del 2014 contra los deudores que no se hayan acogido al beneficio de que trata el artículo 7° de la presente ley, si los plazos vencidos de sus obligaciones ameritan el inicio del cobro.***" "**Parágrafo 1°. Los procesos a que se refiere el presente artículo, no estarán sometidos a la suspensión de que trata el artículo anterior. En todo caso, el deudor demandado conservará el beneficio para el pago previsto en el artículo 7° de esta ley, si resolviere acogerse a los parámetros allí dispuestos.**" (Negritas y subrayas fuera del texto).

Lo anterior nos indica, que mis prohijados al no haberse acogido a los beneficios que les concedían la Ley 1504 de 2011 y la Ley 1731 de 2014, sus obligaciones con FINAGRO, no fueron cobijadas con la suspensión de los términos de prescripción que tratan las citadas normas, por ende, los términos suspensivos de la prescripción para ellos cesaron a partir del **1° de octubre de 2012**.

Así mismo debemos recordar que una vez cesan las causales de suspensión de la prescripción, el conteo del curso del plazo se retrotrae, debiéndose con ello tomar en cuenta el tiempo transcurrido. (Ver definición, Diccionario Jurídico – Editorial Temis S.A. Bogotá –Colombia, 1986).

3°.- El 13 de mayo de 2009, ejerciendo la acción cambiaria, mediante demanda ejecutiva singular cuyo trámite y conocimiento radica en su Despacho, **FINAGRO**, pidió se librara mandamiento ejecutivo contra mi prohijado por las obligaciones contenidas en los títulos valores anotados.

4°.- El auto de mandamiento ejecutivo dictado por su Despacho dentro de éste proceso, fue notificado por personalmente al demandado **IBELINTON ANTONIO MONTAÑEZ SANCHEZ** el día 24 de enero de 2020.

5°.- Que por estos mismos hechos los pagarés N° **01106536-1** y N° **01106536-2**, títulos de recaudo de ésta acción, se encuentran de plano prescritos (prescripción cambiaria).

ELEMENTOS DE ANALISIS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Cabe destacar, que **FINAGRO** incoó la acción de la referencia haciendo uso de la acción cambiaria basada principalmente en el vencimiento de las obligaciones contenidas en los pagarés N° **01106536-1** y N° **01106536-2**, que son objetos de recaudo de dicha acción, este hecho me permite sustentar y fundamentar la presente excepción de fondo en los siguientes términos:

1.- Tal como lo expresa la entidad demandante en la demanda, los demandados se encuentran vencido y en mora para pagar las obligaciones contenidas en los pagarés N° **01105732-1** y N° **01105732-2**, objetos del recaudo en la acción de la referencia, desde el **22 de mayo de 2007** y **22 de mayo de 2006**, respectivamente. Si bien es cierto que la demanda fue presentada en julio de 2016, para esa misma calenda, dichos títulos valores tenían más de tres (3) años de estar vencido.

2.- Mis mandantes fueron notificados del auto de mandamiento de pago dictado en la acción de la referencia, así: Al demandado **IBELINTON ANTONIO MONTAÑEZ SANCHEZ** el día 24 de enero 2020, y al demandado **EDINSON ROSADO SANCHEZ** el 14 de diciembre de 2015.

3.- El artículo 789 del C. de Co., señala que: "La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento." Si bien es cierto que la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda, no es menos cierto que para el caso que nos ocupa, ya para esas calendas las obligaciones contenidas en los citados pagarés ya estaban prescritas.

4.- Es claro señor Juez, que el término transcurrido desde el vencimiento de los pagarés que contienen las obligaciones que aquí se persiguen, hasta la notificación del auto de mandamiento de pago a mi poderdante, es superior a los tres años.

5.- La naturaleza de la prescripción aquí planteada que es en principio de derecho sustancial (Art. 789 del Co de Co.), ha extinguido de plano las acciones judiciales y los derechos ajenos que en los títulos valores se contienen (Art. 2535 del C.C.), por lo cual se tornan a su vez por potestad de este mismo derecho sustantivo en una situación de extinción para poder ejercer la acción procesal propiamente dicha con la consecuente pérdida del derecho en contra de la actora y a favor de mis prohijados.

II.- EXCEPCIÓN DE FONDO DE INEXISTENCIA O INVALIDEZ DE LOS TITULOS EJECUTIVOS, DERIVADA DE LA FALTA DE LOS REQUISITOS O CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS VALORES QUE SE APORTAN COMO OBJETOS DEL RECAUDO:

1°.- Establece el Art. 619 del C. de Co.: "*Los títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del **derecho literal** y autónomo **que en ellos se incorpora**. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías.*" (Negrillas fuera del texto).

Se observa en el caso del epígrafe, que los títulos ejecutivos base del recaudo resultan ser un par de títulos valores (pagarés números **01106536-1** y **01106536-2**), lo que nos lleva a concluir que la actividad jurídico-procesal ejercida es la de la acción cambiaria. La doctrina establece, que la acción

cambiaría "es el ejercicio del derecho incorporado en el título valor, dirigido esencialmente a obtener el pago del valor debido...", encontramos que el medio de defensa aquí sustentado debe necesariamente girar principalmente en el análisis de la acción y de los títulos ejecutivos con relación al derecho cambiario.

2º.- En los pagarés objetos del recaudo en el asunto del epígrafe se establece en sus cláusulas Primeras: "*Pagaré (mos) la suma de: (...) moneda legal Colombiana, **de conformidad con el plan de amortización que se adjunta al presente documento, el cual declaro (amos) conocer y aceptar como parte integrante de este título.***", y se agrega en sus cláusulas Sextas: "*FINAGRO podrá, sin necesidad de requerimiento alguno ni demanda judicial, **declarar vencido o extinguido el plazo concedido para el pago de esta obligación y exigirla en su totalidad, con interese de mora a la tasa estipulada, por incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital o de los intereses** o de las primas de seguros correspondientes al presente crédito.*" (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Encontramos que los títulos valores que nos ocupan, resultan ser **documentos incompletos** porque tal como viene establecido en las obligaciones contenidas en ellos, estas deben ser pagaderas por instalamentos. Faltan en dichos títulos un anexo integral de los pagarés que nos **señalaría con claridad cuáles son los verdaderos plazos, formas, condiciones y modos para la cancelación total de las obligaciones** en ellos incorporadas. Son entonces importantes estos anexos, **que por obvia razones, principalmente de ley, debe estar suscrito o firmado por mi prohijado**, para poder establecer si las fechas de vencimientos que allí se señalan, son las que realmente corresponden de acuerdo con lo establecido en las cláusulas sextas de dicho títulos valores ("*...declarar vencido o extinguido el plazo concedido para el pago de esta obligación y exigirla en su totalidad, (...) por incumplimiento o retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas de amortización a capital o de los intereses...*").

La falta de estos anexos integrales de los pagarés, va en contravía de las características o principios rectores de los títulos valores de la **literalidad** y el de la **incorporación**; requisitos esenciales para la existencia del documento, ya que a través de estas características podemos establecer con toda claridad su naturaleza y el alcance de los derechos y de las correlativas obligaciones incorporadas en ellos. (Arts. 619, 621 y 784, num. 4º del C. de Co.).

Así pues, para los efectos de la literalidad, tenemos que decir que en 'principio no hay otros derechos y obligaciones que los expresados en el escrito del título valor'; por ello la doctrina con certeza expresa: "*La letra revela fielmente lo que vale y vale únicamente cuanto revela...*"

El título valor vale por lo que dice textualmente, de 'ahí que la obligación cambiaria deriva ex scriptura y vale secundum scriptura'; por lo tanto es significativo lo consagrado de manera expresa por el Art. 626 del C. de Co. en lo relativo al principio de la literalidad, cuando norma: "**El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia.**" (Negrillas fuera del texto).

Sostiene la doctrina en cuanto al principio de la incorporación, que éste lo constituye la expresa "*conexión íntima, indisoluble y permanente, desde su nacimiento hasta su muerte, entre el derecho, las obligaciones y el soporte material papel; es decir, derecho sin papel y papel sin derecho no existen.*"

Tenemos así, que lo expresado por el deudor en la generación de un derecho a favor de un acreedor y una obligación clara en cabeza del primero, en materia de títulos valores, físicamente debe estar contenido en un elemento material que es el papel. En el caso que nos ocupa, es claro que el deudor en las cláusulas primeras de los títulos valores que son objetos del recaudo de la acción de la referencia, ha manifestado voluntariamente que: "*Pagaré (mos) la suma de: (...) moneda legal Colombiana, **de conformidad con el plan de amortización que se adjunta al presente documento, el cual declaro (amos) conocer y aceptar como parte integrante de este título.***"; vemos así que a los títulos valores aquí citados les haría falta la literalidad con la que se

expresa de manera *clara* la forma y el modo del pago de las obligaciones, y también ese elemento esencial de conexión íntima, indisoluble y permanente entre el derecho y las obligaciones incorporadas a los documentos, el cual es el papel que las contiene. (Para el caso, el anexo que debe estar también suscrito por mis prohijados y que hace falta o que no se anexa).

3º.- En el ejercicio de integrar la aplicación de la norma adjetiva a la sustancial, encontramos que si violamos el principio de la incorporación en el título valor, no nos es posible hacer la fusión de los elementos materiales, jurídicos y económicos de los títulos, lo cual nos llevaría a determinar de plano sus propias inexistencias. Es que para el caso que nos ocupa, encontramos que hace falta en los títulos valores objetos del recaudo, parte de la declaración unilateral de la voluntad de mis prohijados, la cual se constituye en generadora de derechos y obligaciones.

Por otra parte, igual importancia toma la literalidad para el nacimiento, existencia material, jurídica y económica de los títulos valores que nos ocupan, porque los anexos citados en sus cláusulas primeras (los cuales hacen falta), son los que nos llevarían a establecer con claridad qué y cuanto se debe, cuando se paga, como se paga y las fechas de nacimiento de los títulos valores.

4º.- Se concluye entonces, que los pagarés títulos de recaudo de las obligaciones perseguidas, están incompletos, esta situación conlleva a violar de plano los principios de literalidad e incorporación que rigen para los títulos valores, consecuentemente se convierten en documentos confusos en sus contenidos, especialmente al expresarse los valores de las obligaciones perseguidas, siendo por ello obligaciones inexistentes que de paso dejan de ser expresas, pierden su claridad y por ende su exigibilidad. Surge así la invalidez de los títulos valores esgrimidos como objetos del recaudo dentro de la acción del epígrafe.

III.- EXCEPCION DE FONDO DE INOPONIBILIDAD DE LOS TITULOS DE RECAUDO POR INCUMPLIMIENTO DEL ACREEDOR A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL NEGOCIO SUBYACENTE:

1º.- Las obligaciones a cargo de los productores agropecuarios beneficiarios del PRAN, están sujetas a una legislación especial, tal como aconteció con los créditos hipotecarios de vivienda hoy reglamentados por la Ley 546 de 1999. Para el caso del desarrollo del PRAN el Decreto 967 de 2000, reglamentado por la Resolución 0405 de 2000, ambos emanados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establecieron los requisitos, condiciones y procedimientos para que los productores agropecuarios pudieran acceder a los beneficios del programa, lo mismo que las condiciones para el pago de las deudas que surjan por tal causa.

2º.- Lo primero que se consideró en el Decreto 967 de 2000, es que: *"...corresponde al Gobierno establecer mecanismos, como el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria que se adopta en este decreto, para **destinar sus recursos a la reactivación y fomento agropecuarios dentro de un programa de financiamiento del sector;**"* y reglamentó la Resolución 0450 de 2000 emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo siguiente: ***"Que es necesario propiciar mecanismos tendientes a reactivar el sector agropecuario, mediante la rehabilitación de los pequeños y medianos productores agropecuarios como sujetos de crédito, y que para tales efectos el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1821 de 1999, el cual es inaplicable a la fecha como consecuencia de la declaratoria de inexecutable de la Ley 508 de 1999, por la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo, razón que motivó la expedición del Decreto 0967 del 1º de junio del 2000, mediante el cual se adopta el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria -PRAN, en las mismas condiciones establecidas por el citado Decreto 1821 de 1999."*** (Subrayas y negrillas fuera del texto).

3º.- Claramente establece la norma sustantiva unas condiciones y requisitos para el desarrollo del PRAN. Principalmente, el Estado Colombiano a través del Gobierno Nacional debía adoptar los *"mecanismos tendientes a reactivar el sector agropecuario, mediante la rehabilitación de los pequeños y medianos productores agropecuarios como sujetos de crédito"*, esto es, levantar o cancelar el reporte como deudores morosos con los que figuraban en la Centrales de Riego los productores

agropecuarios, ello con el propósito, para que éstos pudieran ser sujetos de crédito y así las entidades financieras les otorgaran y contabilizaran nuevos créditos para realizar los proyectos productivos que como requisito básico les exigía el programa de reactivación agropecuaria mediante las normas citadas.

Además, para haber accedido a ser beneficiario del PRAN, el productor agropecuario debía presentar como requisito previo un **proyecto productivo** el cual sería financiado con un nuevo crédito con recursos del mismo FINAGRO. Este nuevo crédito, se debía otorgar a los productores con el fin de que éste pague tanto la nueva obligación así como la existente, o sea, aquella comprada por FINAGRO a las entidades financieras. (Arts. 3 y s.s., 4 y s.s., 5 y s.s., 6 y s.s., 7 y s.s. y 8 y s.s. de la Resolución 0405 de 2000, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural).

Salvo la compra de la cartera por parte de FINAGRO a las entidades financieras, el Gobierno Nacional no cumplió con las otras condiciones y requisitos de la norma, por lo que los productores agropecuarios no fueron retirados como deudores morosos de las Centrales de Riesgo, lo que conllevó a que las entidades financieras tampoco les otorgara los respectivos créditos para la realización de los proyectos productivos presentados como requisito para acceder al PRAN.

4º.- Por otra parte la citada Resolución 0405 de 2000, señala en su Art. 8º: *"Forma de pago del beneficiario de la compra de cartera. El monto de la deuda será el valor correspondiente al saldo del capital adeudado al intermediario financiero más los intereses contabilizados no contingentes."* *"Plazos totales de hasta diez (10) años para cancelar la obligación y períodos de gracia de hasta tres (3) años para abonos de capital e intereses, contados a partir de los correspondientes desembolsos."* *"Plazos para pagos de intereses, a definir, según el flujo de fondos proyectado."* *"Tasa de interés del IPC nacional del 2000 más tres (3) puntos contingentes, reajustado al vencimiento de cada periodo con base en el IPC de los últimos doce (12) meses, expresados ambos en términos efectivos anuales. Estos tres puntos se eliminarán de su cobro en cada pago, cuando éste se efectúe en la fecha estipulada o con antelación a ésta."* *"El PRAN podrá compartir con los intermediarios financieros las garantías disponibles cuando se requiera para garantizar un nuevo crédito de reactivación o un crédito distinto preexistente."* **"Las fechas de amortización de la cartera adeudada al PRAN por parte de los productores agropecuarios, deberán ajustarse en lo posible a los ciclos de la producción del proyecto productivo."** *"Dentro de los acuerdos que FINAGRO establezca con los intermediarios financieros para la compra de cartera, deberán definirse mecanismos y estrategias favorables a los productores, tendientes a la cancelación de los pagos correspondientes a honorarios, gastos judiciales y demás conceptos no incluidos en el Decreto 0967 del 2000, **en el entendido de que es imprescindible la habilitación de los productores con el sistema financiero a efecto de que los propósitos de la reactivación agropecuaria sean viables.**"* *"Los estímulos del PRAN a los aportes de los departamentos consagrados en el artículo 5 del Decreto 0967 de 2000, se concederán por el órgano directivo del PRAN el cual definirá el alcance de dichos beneficios."* *"Los medianos productores de que trata el artículo 7 literal c del Decreto 0967 del 2000, que no pudieren cancelar el 10% en dinero y optaren por pagar un mínimo del 20% representado en tierras con condiciones de explotación adecuadas, en lo relativo a su tamaño, calidad del suelo, fuentes de agua y accesos, sobre el valor de la obligación adquirida, en ningún caso serán inferiores a una UAF (Unidad Agrícola Familiar). El costo de los avalúos de dichos predios será asumido por el productor interesado."* (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Se establece entonces dos condiciones esenciales que debía cumplir el Estado Colombiano a través de FINAGRO para que los beneficiarios del PRAN, entre los que se cuentan mis prohijados, **estén obligados en el pago de los créditos que aquí se persiguen**, ellos son: 1.- El ser *"imprescindible la habilitación de los productores con el sistema financiero a efecto de que los propósitos de la reactivación agropecuaria sean viables"* y, 2.- Que las *"fechas de amortización de la cartera adeudada al PRAN por parte de los productores agropecuarios, deberán ajustarse en lo posible a los ciclos de la producción del proyecto productivo."* El Gobierno Nacional no cumplió con ninguno de estos dos requisitos.

PETICION:

1º.- Sírvase señor Juez, desestimar las pretensiones de la demanda del proceso de la referencia, en su lugar declarar probadas las presentes excepciones de fondo y consecuentemente dar por terminado el proceso ordenando el archivo definitivo del expediente que lo contiene.

2º.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordene usted el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas en la acción del epígrafe, y oficie a quien corresponda la cancelación de las mismas.

3º.- Sírvase condenar en costas y perjuicios a la parte demandante.

DERECHO:

Decreto 3363 de 2007; Decreto 967 de 2000; Resolución 0405 de 2000, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; artículos 442 y s.s. y 94 del Código General del Proceso y demás normas concordantes.

PRUEBAS:

Ténganse y valórense las siguientes pruebas:

1.- Documentales:

- Todas las aportadas anexa a la demanda.

2.- Exhibición de documentos: Obrando en concordancia con el Art. 265 del Código General del Proceso, y con el objeto de probar las manifestaciones contenidas en cada una de las excepciones planteadas como medio de defensa en este escrito, y que se constituyen en elementos probatorios fundamentales de dichas excepciones, solicito muy comedidamente al señor Juez, se sirva decretar como prueba la **exhibición de los siguientes documentos** que están en poder de la parte actora: a.- Cartas de aprobación de los crédito otorgados a mis prohijados en virtud al PRAN; b.- Proyecto productivo presentado por mis prohijados a FINAGRO para la concreción del PRAN en beneficios de ellos, y c.- Los documentos que contienen la negociación y compra de la cartera a la banca comercial que originaron las obligaciones pecuniarias insertas en los pagarés objetos del recaudo de la acción de la referencia.

ANEXO:

Anexo el siguiente documento:

- Poder a mi otorgado.

DIRECCIONES:

La de la demandante y su apoderado, aparecen en el libelo de demanda.

A mi mandante, aparecen en el libelo de demanda.

Al suscrito en la carrera 11A N° 11-71 de Valledupar, celulares: 315-7177778 ó 300-5705680, E-mail:elmerenriquedaza@hotmail.com y en la Secretaría de su Despacho.

Del señor Juez, atentamente,

ELMER ENRIQUE DAZA DAZA.